

LA CRISIS POLÍTICA EN PAKISTÁN (2007-2009): UNA VISIÓN DESDE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN ISLAMABAD

Enrique Baltar Rodríguez, PhD
Universidad de Quintana Roo

Abstract

The last two years March / 2007 to March / 2009 were a turning point in the process of democratic transition in Pakistan. The reelection ambition of General Pervez Musharraf and his confrontation with the judiciary sparked a political crisis in a complicated internal scenario exacerbated by Islamist violence and the pressures of US counterterrorism strategy. The crisis led to a democratic transition that ended the military regime and brought back to power to a civilian government weakened by the destabilizing effects of the old partisan bickering. The cables from the US embassy in Islamabad, revealed by Wikileaks in November 2010, confirmed that Washington and the Pakistani military acted as mediators and arbitrators in the game of political forces. This article discusses some events of the period in the light of these documents, focusing on three key issues: the circumstances of the departure of Musharraf from power, the role of the US and military in the process, and the confrontation Zardari/ Sharif and its effect on civil-military relations.

Keywords: Crisis, democratic transition, Pakistan, United States

Resumen

Los dos años transcurridos de marzo/2007 a marzo/2009 constituyeron un momento crucial en el proceso de transición democrática en Pakistán. La ambición reeleccionista del general Pervez Musharraf y su enfrentamiento con el poder judicial desataron una crisis política en un complicado escenario interno exacerbado por la violencia islamista y las presiones de la estrategia antiterrorista de Estados Unidos. La crisis desembocó en una transición democrática que puso fin al régimen militar y trajo de regreso al poder a un gobierno civil debilitado por los efectos desestabilizadores de las viejas disputas partidistas. Los cables de la embajada de Estados Unidos en Islamabad, revelados por Wikileaks en noviembre de 2010, confirman que Washington y los militares pakistanís

fungieron como mediadores y árbitros en el juego de las fuerzas políticas. El presente artículo analiza algunos eventos del período a la luz de esa documentación, centrandó la atención en tres cuestiones fundamentales: las circunstancias de la salida de Musharraf del poder, el papel de los militares y de Estados Unidos en el proceso, y la confrontación Zardari-Sharif y su efecto en las relaciones civiles-militares.

Palabras clave: Crisis, transición democrática, Pakistán, Estados Unidos

Introducción

La política en Pakistán ha estado regida por el comportamiento cíclico de las relaciones civiles-militares. La imposibilidad de consolidar una estructura institucional democrática y la incapacidad del poder civil para controlar a las Fuerzas Armadas, contribuyeron a convertir la alternativa pretoriana en una especie de garantía para la estabilidad interna del país. Tras el primer golpe de Estado en 1958, el curso político se enrumbó hacia la alternancia de periodos de dominio directo de los militares (1958-1971, 1977-1988, 1999-2008) y de gobiernos civiles supeditados a la influencia de la institución castrense. Un desarrollo particular que algunos autores han calificado de democracia pretoriana, no liberal, en la que los militares no sólo se mantienen fuera del control civil, sino también determinan los límites de operación de los gobiernos elegidos, reservándose para sí el control de los principales ámbitos del poder (Singh y Bailey, 2013:103).

La intervención de los militares en la política adoptó la forma de un mesianismo recurrente dispuesto a salvar al pueblo de las ambiciones de los partidos políticos y de la incompetencia de las administraciones civiles. Aunque movidos en el fondo por sus grandes intereses corporativos (Siddiqua, 2007) y por la pretensión de controlar la agenda de seguridad nacional, los planes de contingencia del ejército se cuidaron siempre de presentar sus acciones golpistas como respuestas involuntarias a una situación de crisis inminente. Para alimentar esa imagen de garante de la nación, al tomar el poder gobernaron en alianza con la burocracia civil y se valieron de recursos extra-constitucionales para crear cierta apariencia de legalidad que les permitiera gobernar dentro de un marco constitucional remodelado (Aziz, 2008: 45). Ese interés por la legitimación del poder, a pesar de su naturaleza autoritaria, contribuyó de cierta forma a la repetición sucesiva del ciclo político, abriendo brechas para la germinación en su seno de manifestaciones democratizadoras y contrarias a la preservación del régimen.

En 2007 la política paquistaní entró en un proceso de transición de ese tipo, cuando la pretensión del general Pervez Musharraf de asegurarse un nuevo mandato como presidente del país chocó con la resistencia de la sociedad civil y de los partidos de oposición, dentro de un complejo

escenario político exacerbado por la virulencia del islamismo radical, el asesinato de Benazir Bhutto y las presiones de Estados Unidos para que el gobierno paquistaní asumiera sus responsabilidades en el combate al terrorismo. La crisis desembocó en una transición democrática que obligó a la renuncia de Musharraf en agosto de 2008 y devolvió el poder a un gobierno civil constitucionalmente elegido, aunque la inestabilidad se mantuvo latente hasta 2009 debido a la rivalidad entre las dos principales formaciones políticas del país, el Partido Popular de Pakistán (PPP), del nuevo presidente Ali Zardari, y la Liga Musulmana de Pakistán-N (PML-N) encabezada por el ex primer ministro Nawaz Sharif.

Los documentos revelados por Wikileaks en noviembre de 2010 demostraron que Estados Unidos fue un observador interesado del proceso político interno de Pakistán. Entre la información divulgada en ese momento aparece medio centenar de cables de la embajada de Estados Unidos en Islamabad, fechados en el periodo 2007-2009, que constituyen una interesante fuente de información para entender algunas interioridades de esa transición política. El presente artículo se propone analizar algunos eventos políticos del período a la luz de esa documentación, centrando la atención en tres cuestiones fundamentales: las circunstancias de la salida de Musharraf del poder, el papel de los militares y de Estados Unidos en el proceso, y la confrontación Zardari-Sharif y su efecto en las relaciones civiles-militares.

De la reelección a la transición: el itinerario de la crisis política

Antes de proceder al análisis de los documentos provenientes de la embajada de Estados Unidos en Islamabad, considero conveniente hacer un breve preámbulo acerca del escenario interno de la crisis de 2007-2008, para luego poder insertar, de una manera más comprensible, la información particular contenida en las fuentes cablegráficas dentro del contexto general del proceso político.

Desde su arribo al poder en octubre de 1999, el general Pervez Musharraf recurrió a medios extra-constitucionales para legitimar la autoridad dimanada del golpe de Estado (Rizwan, Rafiuddin y Waqar, 2013:102). La Constitución del país fue suplantada por la Orden Constitucional Provisional No. 1 de 1999 (PCO, por sus siglas en inglés) y los jueces del Tribunal Supremo de Justicia que se negaron a prestarle juramento fueron inmediatamente relevados de sus cargos. El Tribunal renovado validó el poder de Musharraf por tres años, con la condición de que al término de ese período --contado a partir de la fecha del golpe, debía convocar elecciones para restablecer el proceso constitucional. El 20 de junio de 2001 el general asumió el título de presidente y en mayo del año siguiente, a cinco meses de concluir el plazo otorgado por el Tribunal, ganó un fraudulento referendo nacional para prorrogar por cinco años su mandato

presidencial, al tiempo que siguió ostentando su grado militar y su cargo como jefe del Estado Mayor del Ejército (Malik, 2010: 51).

A principios de 2007, el general Musharraf puso en marcha la maquinaria política para asegurarse un nuevo período presidencial en un contexto aparentemente favorable. En el plano interno, la economía mostraba un buen desempeño con tasas de crecimiento anual del 7% y la oposición política estaba dividida, con poca capacidad de movilización y con sus principales líderes fuera del país (Rashid, 2009:488). Del lado externo, Estados Unidos respaldaba la reelección como la mejor opción para su guerra contra el terrorismo, a pesar de su creciente desconfianza hacia el doble juego del presidente pakistaní. Paradójicamente, la mayor amenaza visible provenía del Tribunal Supremo de Justicia, la instancia que había legitimado en su momento el golpe de Estado, pero que bajo la presidencia del juez Iftikhar Chaudhry, designado por el propio Musharraf en 2005, estaba dando señales de una peligrosa autonomía al dictar sentencias contrarias a los intereses del régimen, como las órdenes de liberación de opositores políticos --encarcelados sin ser sometidos a juicio bajo supuestos cargos, incluido el de terrorismo-- y la autorización de retorno al país del ex primer ministro Nawaz Sharif, líder de la opositora Liga Musulmana de Pakistán-N (PML-N).

Musharraf decidió no correr el riesgo de una posible interferencia del Tribunal Supremo de Justicia bajo el argumento de que ningún oficial en activo podía ser elegido presidente, y procedió a destituir de su cargo a Iftikhar Chaudhry en marzo de 2007. La embestida contra el poder judicial tuvo un efecto contraproducente y se convirtió en el telón de fondo de la confrontación política entre el oficialismo y la oposición (Vid. Baltar, 2009: 63-71). En muchas partes del país se puso en marcha un amplio movimiento de protesta popular que sirvió para radicalizar el escenario preelectoral y activar las bases de apoyo de los partidos opositores. La ola contestataria coadyuvó a la colaboración entre las fuerzas antigubernamentales que se organizaron bajo el llamado Movimiento Democrático de Partidos Unidos (APMD), una cosmopolita coalición promovida por la PML-N y secundada por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas, incluido el bloque islamista *Muttahida Mahaz-e-Amal* (MMA).

Sin embargo, la mayor agrupación opositora del país, el Partido Popular de Pakistán (PPP), rechazó integrarse a la coalición, no sólo por su negativa a comulgar con los islamistas en un frente común, sino porque por ese entonces Estados Unidos y Gran Bretaña estaban promoviendo un acercamiento tras bambalinas entre Musharraf y Benazir Bhutto, con la finalidad de concertar un acuerdo para el establecimiento de un gobierno conjunto de corte moderado, pro-occidental y aliado en la guerra contra el terrorismo (Malik, 2010: 38). La base de la negociación se centró en

conseguir el respaldo del PPP a las aspiraciones reeleccionistas de Musharraf a cambio de una apertura del sistema político y de la concesión de una amnistía de los procesos judiciales por cargos de corrupción contra Bhutto y otras figuras políticas que desempeñaron puestos públicos entre 1988 y 1999, lo cual permitiría el regreso al país de la líder del PPP y la posibilidad de que pudiera conseguir nuevamente el cargo de primer ministro, aunque bajo las estipulaciones de la 17ma Enmienda que daban al presidente la facultad para destituirlo.

La agenda del bloque opositor se centró en tres cuestiones principales. La primera era el respaldo a la independencia del poder judicial, acción que alcanzó un éxito temporal con la restitución de Iftikhar Chaudhry como presidente del Tribunal Supremo de Justicia en julio de 2007. La segunda se refería a las fechas de las elecciones presidenciales y legislativas, ya que en el sistema político paquistaní el presidente y el primer ministro son elegidos por la Asamblea Nacional y por las asambleas provinciales de entre sus propios miembros. Mientras el gobierno pretendía que fueran los órganos legislativos salientes, con mayoría oficialista, quienes eligieran al nuevo presidente, la oposición pugnaba por la realización previa de las elecciones legislativas para tratar de cambiar la correlación de fuerzas en los órganos encargados de elegir al presidente y al primer ministro.

La tercera era la impugnación de la candidatura del general Musharraf por retener su estatus militar siendo el presidente civil del país, dualidad considerada ilegal desde el punto de vista constitucional. Éste había incumplido la promesa de renunciar a las fuerzas armadas a finales de 2004, después de la aprobación de la 17ma Enmienda Constitucional que amplió sus poderes presidenciales y le confirió la facultad de disolver la Asamblea Nacional (EU Election Observation Mission, 2008: 11). Ante la cercanía de las elecciones la oposición arreció los reclamos para que Musharraf renunciara al cargo de jefe de las Fuerzas Armadas y se quitara el uniforme. Las fuerzas antigubernamentales apelaron al Tribunal Supremo para que dictaminara ilegal su candidatura si antes de las elecciones no anunciaba su renuncia militar. En caso contrario, la oposición amenazó con retirar a sus diputados de las asambleas para boicotear las elecciones. Musharraf rechazó la exigencia y proclamó que, sólo si ganaba las elecciones, haría efectiva su renuncia al ejército antes de jurar el cargo de presidente.

La situación interna se agravó seriamente durante la segunda mitad de 2007. El operativo de seguridad contra la *Lal Masjid* (mezquita Roja) de Islamabad, a principios de julio de 2007, marcó la ruptura definitiva del islamismo radical con el régimen de Musharraf, contra el cual volcó su furia por todo el país (Abbas, 2009: 18-29). La insurgencia rompió el acuerdo de paz concertado con el gobierno en septiembre de 2006 y reactivó sus operaciones en Waziristán, las cuales se extendieron rápidamente a las otras

agencias de las Áreas Tribales Federalmente Administradas (FATA, por sus siglas en inglés) y también al valle de Swat, en la Provincia de la Frontera Noroeste. En diciembre un conjunto de grupos rebeldes locales, de origen predominantemente pastún, formaron el *Tehrik-e-Taliban Pakistan* (TTP), más conocido como talibán paquistaní, para coordinar las operaciones contra Estados Unidos y la OTAN en Afganistán y contra el ejército paquistaní en su propio territorio. La administración Bush intensificó las presiones sobre su aliado en la guerra contra el terrorismo y recurrió con más frecuencia a los ataques con drones en las zonas tribales de Pakistán (Plaw y Fricker, 2012:344), operativos que coadyuvaron a reforzar el antiamericanismo y la resistencia pública a una guerra percibida por muchos como una cruzada anti-islámica de Estados Unidos y un atentado a la soberanía nacional.

En otro frente interno, las acciones emprendidas por el régimen desvanecieron las esperanzas sobre un proceso electoral transparente y democrático. El 10 de septiembre Nawaz Shrif trató de ingresar al país amparado en la resolución del Tribunal Supremo de Justicia, pero fue interceptado en el propio aeropuerto y deportado nuevamente por órdenes expresas de Musharraf. Pocos días después, la Comisión Electoral fijó la fecha de las elecciones presidenciales para el 6 de octubre de 2007, ratificando la línea oficial de elegir al presidente antes de renovar los órganos legislativos.

La Comisión Electoral publicó la lista de aspirantes a la presidencia, encabezada por Pervez Musharraf, sin esperar el dictamen del Tribunal Supremo sobre los recursos en contra del doble mandato. El bloque opositor cumplió la amenaza y sus diputados abandonaron los escaños en la Asamblea Nacional y en las provinciales con la intención de restarle legitimidad a la elección presidencial. Entretanto, Musharraf procedió a preparar el camino para su relevo de confianza al frente de las Fuerzas Armadas, el cual recayó en el hasta entonces director del *Inter Services Intelligence* (ISI) Ashfaq Pervez Kayani, a quien ascendió al grado de general y promovió al cargo de subjefe del Estado Mayor del Ejército. Dos días antes de las elecciones, Musharraf emitió la ordenanza que garantizaba la amnistía pactada en las negociaciones con Benazir Bhutto, esperando que la líder del PPP, que todavía daba muestras de indecisión acerca de si concertaba una alianza con el general o se sumaba al bloque opositor, cumpliera su parte y los diputados del PPP se abstuvieran de votar en contra de su candidatura.

Sin detractores en las asambleas, Musharraf ganó abrumadoramente las elecciones presidenciales al obtener 671 votos de los 685 legisladores participantes (EU Election Observation Mission, 2008: 11), pero el Tribunal Supremo instruyó a la Comisión Electoral para que los resultados no se hicieran oficiales hasta el 18 de octubre, plazo establecido por el órgano

judicial para emitir el dictamen pendiente acerca de los recursos en contra de la candidatura del general. Sin embargo, el Tribunal no emitió el veredicto en la fecha anunciada y la demora fue interpretada como un acto de renuencia a reconocer el resultado electoral, lo cual condujo a un nuevo enfrentamiento del ejecutivo con el poder judicial.

Con la justificación de la violencia islamista y de la parálisis gubernamental provocada por la falta de cooperación del Tribunal Supremo, el 3 de noviembre el presidente decretó el estado de emergencia y la suspensión de la Constitución. Iftikhar Chaudhry fue destituido de su cargo por segunda vez en ese año, junto con ocho magistrados que declararon ilegal el Orden Constitucional Provisional (OCP) proclamado por Musharraf. El estado de emergencia truncó cualquier posibilidad de alianza con Benazir Bhutto (Malik, 2010: 72), quien había regresado al país el 18 de octubre en medio de multitudinarias muestras de apoyo y también de un brutal atentado terrorista perpetrado por sus enemigos islamistas. La líder del PPP asumió una posición cada vez más abierta de enfrentamiento a Musharraf y terminó confinada en arresto domiciliario por su amenaza de organizar una marcha de protesta en la capital si el presidente no renunciaba a la jefatura del Ejército, convocaba elecciones y restituía la Constitución.

Estados Unidos y Gran Bretaña, que habían estado auspiciando el acercamiento con Bhutto, presionaron al mandatario paquistaní para que levantara el estado de emergencia y prosiguiera el curso del proceso democrático, dejando claro que ello no afectaría la ayuda militar para combatir al terrorismo y la insurgencia islamista. El presidente aseguró a sus aliados que no tenía intención de prolongar el estado de emergencia y que los comicios generales se realizarían antes del 9 de enero de 2008, una vez restablecido el orden y la tranquilidad.

Siguiendo la tradición pretoriana, Musharraf aprovechó los poderes extraordinarios del Orden Constitucional Provisional para adoptar, en poco más de un mes, las medidas necesarias para fortalecer su posición política (Singh y Bailey, 2013:119-120). El 16 de noviembre tomó juramento al gobierno interino que se encargaría de la organización y supervisión de las próximas elecciones legislativas. Pocos días después, la Comisión Electoral publicó el Código de Conducta y el calendario de los comicios, fijando la fecha de la votación para el 8 de enero de 2008. Más de tres millares de opositores fueron liberados después del anuncio para darle credibilidad al proceso electoral.

El nuevo Tribunal Supremo falló a favor de Musharraf en todos los recursos presentados por la oposición y validó su victoria en la contienda presidencial. También instruyó a la Comisión Electoral para que, antes de concluir el mes de noviembre, publicara oficialmente los resultados de la elección del 6 de octubre; y resolvió que el presidente renunciara a su estatus

militar antes de realizar el juramento de su segundo mandato, ceremonia que se efectuó el 28 de noviembre en el Cuartel General de Rawalpindi donde, como estaba previsto, el general Kayani se convirtió en el nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército.

Un día antes de levantar el estado de emergencia, el presidente introdujo seis nuevas enmiendas a la Constitución por medio de órdenes ejecutivas (Kronstadt, 2008: 3). Una de ellas le permitía buscar la reelección por un nuevo periodo de cinco años, y otra validaba el despido de los magistrados del Tribunal Supremo ocurrido el 3 de noviembre y le impedía recuperar sus cargos. Una vez asegurado el blindaje suficiente, el presidente Musharraf puso fin al orden provisional y, el 15 de diciembre, restableció la Constitución de 1973 y volvió a tomarles juramento a los jueces del Tribunal Supremo, encabezado por Abdul Hameed Dogar, que lo habían apoyado con la validación del estado de emergencia.

El Movimiento Democrático de Partidos Unidos (APMD) no consiguió cerrar filas en torno a la estrategia de boicotear las elecciones legislativas. La decisión del PPP de contender en los comicios de enero, obligó a la PML-N, su contrincante tradicional y cabeza de la APMD, a cambiar su posición en favor del boicot para no dejarle el campo libre al partido de Benazir Bhutto. En consecuencia, se llegó al acuerdo de que cada agrupación definiera su propia posición hacia las elecciones. Así, a pesar de su común oposición a Musharraf, los intereses particulares de los grupos políticos impidieron la colaboración entre partidos para conformar una fuerte coalición, ya fuera para boicotear las elecciones o para tratar de ganarlas.

Sin embargo, tras el asesinato de Benazir Bhutto, el 27 de diciembre de 2007, el panorama político y electoral sufrió un vuelco repentino. Debido a la conmoción interna, la Comisión Electoral pospuso las elecciones legislativas para el 18 de febrero de 2008. Sus resultados reflejaron el cambio originado por la trágica coyuntura. El PPP fue el gran ganador de los comicios al convertirse en la primera fuerza de la Asamblea Nacional con 88 escaños (33%) de los 268 en disputa, seguido de la PML-N de Nawaz Sharif con 66 asientos (25%). El partido de Musharraf, la oficialista Liga Musulmana de Pakistán-Q (PML-Q), perdió la posición dominante que había disfrutado en la legislatura anterior y quedó relegada a la tercera posición con sólo 38 puestos (14%) (Election Commission of Pakistan, 2008).

En las asambleas provinciales también cambió la correlación de fuerzas. En Sind, centro de su base social, el PPP ganó 66 de los 125 escaños en disputa, suficientes para formar un gobierno provincial de mayoría. El partido de Nawaz Sharif también ganó en su provincia de origen, el Punjab, donde obtuvo 102 asientos, por 77 el PPP y 67 la PML-Q, pero sin conseguir la cantidad necesaria para integrar su propio gobierno. En las otras dos provincias el PPP quedó en segunda posición, con 18 puestos en la

Provincia de la Frontera Noroeste (NWFP), detrás del Partido Nacionalista Awami (ANP), y 7 en Beluchistán, la única provincia donde el partido oficialista obtuvo más escaños (Idem).

Fortalecidos por el triunfo electoral y en medio de una compleja situación interna, la PML-N y el PPP --dirigido desde ese momento por Ali Asif Zardari, esposo de Benazir Bhutto-- concertaron un pacto inédito en la historia política del país, basado en la oposición a Musharraf y en la restitución de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia (Rizwan et al., 2014: 103-104). La formación de la coalición les aseguró el control de la Asamblea Nacional y de las dos principales provincias del país, y les permitió imponer la candidatura de Yousaf Raza Gilani para primer ministro, una figura prominente del PPP, fiel colaborador de Benazir Bhutto y viejo enemigo de Musharraf. Éste expresó su disposición a trabajar con el nuevo gobierno, pero se negó a dejar la presidencia como reclamaban sus opositores, a pesar de que las elecciones habían resultado una especie de referendo en contra de su gestión (Kronstadt, 2008: 8). La coalición siguió presionando desde el órgano legislativo y el propio gobierno central para conseguir la destitución del presidente, esfuerzo que finalmente fructificó cuatro meses después cuando, debilitado y con la amenaza de ser juzgado bajo el cargo de traición por el golpe de Estado y la imposición de la ley marcial, Musharraf anunció su dimisión el 18 de agosto de 2008.

Conforme al procedimiento establecido en la Constitución, el 6 de septiembre se realizó la votación en los órganos legislativos para elegir al nuevo presidente. El candidato del PPP, Ali Zardari, obtuvo una amplia victoria al conseguir más del 60% de los votos otorgados por los legisladores de las dos cámaras nacionales y de las cuatro asambleas provinciales del país. De esa forma se consumó la transición política que puso fin a nueve años de régimen pretoriano y abrió nuevamente la posibilidad de una alternativa democrática. Sin embargo, la renuencia del gobierno del PPP a restituir en sus cargos a los jueces depuestos por Musharraf, y la repentina decisión de Zardari de buscar la presidencia, en contra de un supuesto acuerdo de neutralidad partidista con la PML-N, llevaron a la quiebra de la efímera coalición (Malik, 2010: 158). Apenas alcanzado el objetivo común de expulsar del poder a Musharraf, la agrupación de Nawaz Sharif pasó de nuevo a la oposición y la transición democrática tuvo que navegar por las turbulentas aguas de la tradicional rivalidad entre el PPP y la PML-N.

Visiones y percepciones preelectorales

Las fuentes cablegráficas confirman que Estados Unidos respaldó en su momento los planes reeleccionistas de Musharraf y recibió información oportuna de sus acciones. Una semana antes que la Comisión Electoral fijara la fecha de la elección presidencial, Musharraf y el Subsecretario de Estado

John Negroponte sostuvieron una reunión el 13 de septiembre de 2007 en presencia de la embajadora Anne Paterson. En un reporte posterior sobre el encuentro, la funcionaria refiere que Musharraf reiteró que su primera prioridad era la reelección y que, a pesar de la intervención del Tribunal Supremo, el proceso se realizaría en 18 días para conseguir su segundo mandato antes del 15 de octubre (US Embassy Islamabad, 2007a: 2).

Sobre la deportación del ex primer ministro Nawaz Sharif, ordenada por Musharraf apenas tres días antes, el Subsecretario de Estado expresó la comprensión de la Casa Blanca hacia el hecho, aunque remarcó la importancia de que el mandatario pakistaní se mostrara lo más inclusivo posible y asegurara que las elecciones fueran libres y justas (Ídem) un formalismo diplomático irrelevante, casi cínico, considerando las intenciones confesas de Musharraf. El documento también hace referencia a la negociación con Benazir Bhutto y revela que el presidente pakistaní pensaba que si el acuerdo tenía éxito, era conveniente incorporar al gobierno de coalición a la *Jamiat Ulema-e-Islam* (JUI-F), liderada por Fazlur Rehman, a quien Musharraf describió como una figura moderada y flexible, cuya inclusión podía ser muy útil para dividir a los partidos islamistas y evitar la visión polarizada de una confrontación entre no religiosos y religiosos (Ídem). En los despachos posteriores no se hace ninguna otra alusión a ese tema particular, pero es de suponer que debió resultar un aspecto ríspido de las negociaciones, teniendo en cuenta la posición pública del PPP de mantenerse fuera del Movimiento Democrático de Partidos Unidos (APMD) para no cerrar filas con grupos islamistas.

En los cables divulgados hay una desafortunada laguna en relación a los meses de octubre-diciembre de 2007, por lo que no es posible encontrar información referida a la elección presidencial y al estado de emergencia. Sin embargo, los cables de fechas previas a las elecciones generales de febrero de 2008 nos presentan el escenario de una oposición interesada en conseguir el apoyo de Estados Unidos al proceso democrático y de un presidente Musharraf políticamente aislado.

El 25 de enero de 2008 la embajadora Anne Paterson sostuvo una reunión de hora y media con el copresidente del PPP Ali Zardari. En su nota del encuentro, la diplomática sostiene la impresión de que Zardari deliberadamente sabía lo que su interlocutora deseaba escuchar, pero que aun así se había mostrado más equilibrado y competente de lo esperado (US Embassy Islamabad, 2008a:2). A su juicio, la principal intención del nuevo dirigente del PPP era obtener la bendición de Estados Unidos a su liderazgo y convencerlo de su legitimidad como sucesor. Zardari le mostró copia de una carta manuscrita de Benazir Bhutto, que no hizo pública a pesar de los numerosos requerimientos de la prensa, en la que supuestamente su esposa expresaba la voluntad de legarle la dirección del partido; y le explicó que su

decisión de compartir la presidencia del PPP con su hijo Bilawal había sido un acto simbólico para honrar su legado. Sin embargo, en opinión de la funcionaria, el recurso de la copresidencia parecía más una maniobra para neutralizar las suspicacias dentro de la propia élite dirigente del PPP y denotaba la intención de Zardari, con poco capital político propio, de seguir aprovechando el linaje de la dinastía Bhutto para consolidar su posición a la cabeza del partido (Ídem).

Patterson también manifestó la impresión de que Zardari podría tratar de buscar la candidatura del PPP para primer ministro, si bien consideraba que el momento no le era propicio y que al partido le convendría más otra alternativa (Ídem: 6). Al final Zardari no pudo inscribirse como candidato en las elecciones legislativas de febrero y quedó automáticamente descartado. La candidatura de unidad recayó en Yousaf Raza Gilani, quien fue elegido primer ministro por una amplia mayoría de los legisladores. Sin embargo, como supuso Patterson, Zardari no tardó en destapar sus aspiraciones de poder y en las elecciones especiales de junio consiguió un escaño vacante en la Asamblea Nacional que le permitió buscar la presidencia del país después de la dimisión de Musharraf, aun al costo de romper el gobierno de coalición con la PML-N.

En el informe de ese encuentro hay otros tres aspectos que vale la pena resaltar. Primero, la garantía de que el PPP no se sumaría al boicot electoral pretendido por el bloque opositor encabezado por la PML-N. Zardari refrendó su apoyo al proceso democrático y le expresó a la embajadora Patterson que también trataba de convencer a su partido del compromiso de Estados Unidos con la democracia en Pakistán (Ídem: 3), lo que podría interpretarse como un sutil reproche por el respaldo de Washington a Musharraf. A menos de un mes del atentado, llama la atención que la propia diplomática mostrara cierta sorpresa por lo poco que Zardari se refirió a la teoría de la conspiración que implicaba al régimen en el asesinato de su esposa (Ídem: 5). Esto pudo ser una decisión deliberada en su propósito de buscar un acercamiento con Estados Unidos o también el reflejo de un Zardari más interesado en potenciar sus nuevos horizontes políticos. Su preocupación principal era prevenir el fraude en las elecciones del 18 de febrero, para lo cual consideraba necesario que el ejército se encargara de cuidar los comicios.

Segundo, el copresidente del PPP aseguró a la embajadora su disposición a colaborar con la PML-N y otras fuerzas políticas después de las elecciones para formar un gobierno de unidad nacional (Ídem: 4), de modo que la idea de una coalición estaba sobre la mesa antes del resultado electoral y Estados Unidos, al parecer, seguía considerando la opción negociada con Benazir Bhutto en su momento. Y tercero, Zardari se presentó como un político claramente secular, preocupado por el incremento del extremismo

religioso e interesado en revertir el impacto de la islamización del país impulsada desde los tiempos del dictador Zia ul-Haq (Ibídem: 2). Como se aprecia en cables posteriores, ese rasgo de Zardari se convirtió en su mayor credencial frente a Estados Unidos.

Varios días después la embajadora Patterson sostuvo una reunión con el líder de la PML-N, quien también le confirmó su disposición a trabajar con el PPP en un gobierno de coalición después de las elecciones y calificó la alianza como “lo mejor que podría pasarle a Pakistán” (US Embassy Islamabad, 2008b:1). Pero más allá de esa coincidencia, el reporte de la diplomática muestra divergencias importantes que contrapuntearon luego las posiciones de ambos partidos. La postura de Nawaz Sharif se mostró mucho más dura hacia Musharraf y prácticamente irreductible en la demanda de la restitución de los jueces de la Corte Suprema, en un claro desacuerdo con la visión de la embajadora. Patterson le aseguró que Estados Unidos apoyaba la independencia del poder judicial y deseaba trabajar con el nuevo gobierno en lograrlo, pero que consideraba improbable que la restitución pudiera ser rápida y total, pero el líder de la PML-N insistió en que sin la restitución de los jueces y del presidente de la Corte Suprema no era posible restablecer la ley y el orden en el país (Ibídem: 2).

A la vez que insistió en la postura pro-americana de la PML-N, Sharif expresó su consternación por el hecho de que Estados Unidos, defensor de la democracia y la libertad, siguiera apoyando a un hombre que arremetió contra la Corte Suprema, abrogó la Constitución y arrestó a los activistas de la sociedad civil. Asimismo, advirtió a Patterson sobre el peligro de una escalada violenta si Musharraf intentaba amañar las elecciones y las consecuencias que ello tendría para la estabilidad del país, la imagen de Estados Unidos y el futuro de las relaciones bilaterales (Ibídem: 3). En su opinión, la mejor acción reciente de Estados Unidos había sido arreglar el nombramiento del general Kayani como Jefe del Estado Mayor, lo cual había ayudado a levantar la moral del ejército y el respeto público por la institución, pero reclamó que Estados Unidos y Gran Bretaña deberían abstenerse de seguir tratando a Musharraf como si mantuviera su rango militar. La embajadora Patterson, en su comentario final, destacó lo lejos que había llegado el mito de la influencia de Estados Unidos en Pakistán, cuando un ex primer ministro podía creer seriamente que el gobierno de Washington había controlado el nombramiento del Jefe del Estado Mayor del Ejército (Ídem).

Poco antes de las elecciones, la diplomática escribió un despacho para poner al tanto de la situación interna al Almirante Michael Mullen, presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos en vísperas de su visita a Pakistán. Para ese entonces la percepción sobre Musharraf ya mostraba cambios significativos. Patterson afirmaba que el mandatario

paquistaní había gozado de una alta popularidad hasta principios de 2007 -- una discutible apreciación que parecía más una forma indirecta de justificar el respaldo de Estados Unidos-- pero que desde entonces había cometido una cadena de errores políticos que lo llevaron a enfrentarse con el poder judicial y a promulgar el estado de emergencia y suspender temporalmente la Constitución, decisiones que le enajenaron el apoyo de muchos asesores y lo llevaron a un creciente aislamiento (US Embassy Islamabad, 2008c: 2). Asimismo, agregaba que Musharraf estaba cada vez más a la defensiva y se mostraba inseguro sobre cómo revertir su impopularidad de cara a las elecciones parlamentarias (Ibídem: 6). Hasta el general Kayani, preocupado por levantar la moral de los militares, estaba tratando deliberadamente de poner distancia entre el Ejército y el gobierno de Musharraf, y había desalentado la interferencia del ISI en las elecciones (Ibídem: 5).

Patterson pronosticaba que en las elecciones ningún partido ganaría suficientes votos para formar un gobierno de mayoría, por lo que el único juego viable sería la construcción de una coalición. No parecía compartir el entusiasmo de quienes predecían un fuerte repunte de las simpatías del electorado por el PPP tras el asesinato de Benazir Bhutto y recomendaba trabajar con todos los probables candidatos al puesto de primer ministro en la convicción de que su elección podría demorar semanas e incluso meses (Ibídem: 3). Aunque la alternativa de la coalición se vislumbraba casi inevitable, parece que ninguno de los principales actores --Musharraf, Zardari, Nawaz Sharif y la embajada estadounidense— pudo suponer cuánto en realidad había cambiado el escenario político en menos de dos meses y el efecto que ello tendría sobre los resultados de la votación en las elecciones generales.

La renuncia pactada

La forma pacífica en que Musharraf entregó el poder y el hecho que la amenaza del juicio político pareciera de repente un asunto olvidado, hicieron sospechar desde el principio que la transición de poderes fue un asunto previamente pactado. Algunos despachos de la embajada de Estados Unidos en Islamabad ofrecen información valiosa que ayuda a delinear el curso de esa negociación.

En un cable con fecha 5 de mayo de 2008, la embajadora Anne Patterson reportó una conversación con Ali Zardari en la que el líder del PPP le comunicó sus preocupaciones sobre la permanencia en el poder de Musharraf y su intención de proponerle una salida honorable (US Embassy Islamabad, 2008d). Según la diplomática, Zardari culpó a Musharraf de no asumir la lucha contra el extremismo religioso con suficiente responsabilidad y de contribuir con su actitud a promover los sentimientos anti-norteamericanos y la creencia de que los pakistaníes estaban muriendo por

una guerra de los Estados Unidos (Ídem). El argumento tocaba intencionadamente un punto muy sensible de las relaciones bilaterales. El crédito de Musharraf con la administración Bush estaba en franco descenso por la percepción estadounidense de que su aliado paquistaní no estaba haciendo lo suficiente en la lucha contra el terrorismo y mantenía un doble juego en su política hacia el talibán (US Embassy Islamabad, 2007a). Esa creencia, junto con la supuesta tolerancia de las autoridades afganas hacia los nacionalistas beluches refugiados en su territorio, también habían enturbiado las relaciones de Musharraf con el presidente Hamid Karzai, situación que estaba comprometiendo seriamente la estrategia de la coalición en la frontera afgano-paquistaní para frenar el peligroso avance de la insurgencia islamista (Vid. Nawaz, 2009).

En el encuentro, Zardari reconoció haber subido el tono de sus declaraciones públicas en contra de Musharraf porque estaba temeroso de que el PPP perdiera apoyo popular, mientras que su coyuntural aliado pero eterno rival, el líder de la PLM-N Nawaz Sharif, incrementaba su prestigio apoyando la restauración de los jueces de la Corte Suprema depuestos por el presidente el 3 de noviembre de 2007 y promoviendo la campaña de ¡fuera, Musharraf, fuera! (US Embassy Islamabad, 2008d).

A finales de julio la Embajada de Estados Unidos parecía convencida de la necesidad de apoyar una transición política, pero sin dejar desprotegido a su aliado en desgracia. En un cable secreto de fecha 25 de julio, a propósito de una próxima visita del Primer Ministro Gilani a Washington, la embajadora Patterson comentaba que, mientras Zardari y Gilani insistían en el costo político de seguir trabajando con Musharraf, éste había pedido que la Casa Blanca le dejara claro a Gilani que Estados Unidos seguía respaldando al presidente (US Embassy Islamabad, 2008e). Más adelante apuntaba su creencia de que el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Kayani, se mantendría fuera de la política y apoyaría una salida con dignidad de Musharraf si se hacía efectiva la destitución y concluía advirtiendo que la intención de Musharraf de disolver la Asamblea Nacional e imponer un gobierno tecnocrático sólo incrementaría las manifestaciones en su contra, por lo que se debía apoyar a Gilani antes de que la coalición se derrumbara (Ídem). Lo anterior permitiría suponer que los compromisos para la salida de Musharraf probablemente fueron concertados durante las tres semanas que mediaron entre el 25 de julio y el 18 de agosto de 2008.

Otro cable de fecha 23 de agosto, cinco días después de la renuncia de Musharraf, refleja el papel de mediador y garante que desempeñaron Estados Unidos y el general Kayani en ese proceso. En una reunión efectuada el 20 de agosto, en la que participaron el jefe del Ejército y la embajadora Patterson, el general Kayani le externó sus preocupaciones por la forma en que Zardari estaba demorando el decreto de inmunidad de

Musharraf y le recordó que ese fue el principal argumento que había utilizado para convencer a Musharraf de que abandonara el poder. La nota refiere que Zardari hizo compromisos muy precisos con Kayani, quien temía que la demora pudiera hacerlo ver mal ante la propia institución castrense, donde no pocos rechazaban a Zardari por su fama de corrupto, lo que unido al problema sobre la restauración de los jueces y a las aspiraciones del mismo Zardari de ser presidente, podían crear una situación muy complicada en el país (US Embassy Islamabad, 2008f).

Al día siguiente la embajadora Patterson se reunió con el Primer Ministro Gilani y el Ministro del Interior Rehman Malik. En el reporte del encuentro, la diplomática informa que Gilani le aseguró que su partido (PPP) no deseaba venganza y le proporcionaría la inmunidad a Musharraf, pero después de la elección del nuevo presidente, ya que la sospecha de un trato con Estados Unidos podía restarle muchos votos a la candidatura presidencial de Zardari (Ídem). Dos días después, Patterson también se entrevistó con Zardari para recordarle su promesa de inmunidad, que incluía la asignación de una jubilación digna y el compromiso de no acosar a Musharraf fuera del país. El líder del PPP reiteró la misma versión que antes le diera Gilani, ratificando la promesa que contrajo con Estados Unidos, el Reino Unido y el general Kayani, pero insistiendo en la necesidad de hacerlo después que consiguiera la presidencia del país (Ídem). Esas referencias no solo suponen que el acuerdo para la salida de Musharraf fue negociado exclusivamente con la alta dirección del PPP, sino que también sirvió de recurso para asegurar el respaldo de Estados Unidos y los militares pakistaníes a las aspiraciones presidenciales de su líder.

Luego de asumir la presidencia, Zardari cumplió parcialmente su compromiso sobre la inmunidad de Musharraf, ya que si bien no impulsó inmediatamente la iniciativa legal prometida, tampoco mostró intención de emprender alguna acción judicial contra el ex presidente. A fines de ese mismo mes, en una reunión bipartita encabezada por el Comandante General del CENTCOM, David Petraeus, y el general Kayani, este último manifestó su conformidad con la situación del ex presidente Musharraf y confesó que, a pesar del incumplimiento del presidente de otorgar la amnistía inmediatamente después de asumir el cargo, parecía que el asunto estaba firme y no había razones para preocuparse por su situación legal (US Embassy Islamabad, 2009b:2).

En su reporte de la reunión, la embajadora Patterson agregó el comentario de que Musharraf, en ese momento, estaba visitando a su familia en Estados Unidos y sosteniendo conversaciones allá, aunque no proporciona detalles sobre sus interlocutores. También hace mención a que la construcción de la casa de Musharraf en las afueras de Islamabad estaba muy avanzada y que en unas semanas el ex presidente podría mudarse a su nueva

residencia (Ídem), una observación que reflejaba la tranquilidad de la parte estadounidense sobre el curso futuro del acuerdo. Esa fue la última mención sobre la inmunidad de Musharraf en los cables disponibles. Como se desprende de la opinión de los actores mediadores, en ese momento la cuestión parecía ya supuestamente resuelta.

La confrontación Zardari-Sharif

El acuerdo de coalición suscrito por el PPP y la PML-N en marzo de 2007 descansó en dos pilares fundamentales: la oposición a Musharraf y la aspiración supuestamente compartida de restituir de inmediato en sus cargos a los jueces destituidos el 3 de noviembre de 2007. Sin embargo, la efímera experiencia demostró que la colaboración sólo pudo sostenerse precariamente gracias a lo primero y, aun en ese caso, resultó notable el contraste entre la posición más dura de Nawaz Sharif y la actitud negociadora de Zardari. El segundo pilar, por su parte, terminó exacerbando las viejas rivalidades bipartidistas. Una vez instaurado, el gobierno de Gilani liberó a los jueces encarcelados pero no los restituyó en sus cargos de manera inmediata y recurrió a una táctica dilatoria que suscitó las protestas de la PML-N, la cual poco después retiró a sus ministros del gabinete y anunció su intención de abandonar la coalición, lo que de consumarse en ese momento habría debilitado la presión del bloque opositor sobre Musharraf.

El gobierno del PPP utilizó la dilación para seguir usando el tema como carta de negociación con Nawaz Sharif y la PML-N. En el despacho ya citado de fecha 25 de julio, Patterson afirma que el copresidente del PPP le explicó su intención de retener a Nawaz Sharif en la coalición a través de un entendimiento mutuo para la reducción de los poderes del presidente (abolición de la 17ma Enmienda Constitucional introducida por Musharraf) y de la solución de los cargos pendientes en su contra –presentados también durante el período de Musharraf- que lo inhabilitaban para ocupar puestos públicos y le impedían ser elegible para un tercer mandato como Primer Ministro (US Embassy Islamabad, 2008f). Sin embargo, a luz de los hechos parece claro que Zardari estaba más interesado en maniobrar para asegurar la presidencia que en salvar la coalición con la PML-N, y que los gestos negociadores fueron parte de la estrategia para conseguirla.

La causa de la reincorporación de los jueces se convirtió en un tema tan espinoso porque tras ella había en juego grandes intereses partidistas y también personales. A diferencia de Benazir Bhutto, Ali Zardari y otras muchas figuras del PPP, los hermanos Sharif no fueron incluidos en la lista de funcionarios amnistiados por la Ordenanza de Musharraf previa a las elecciones presidenciales del 6 de octubre de 2007. El líder de la PML-N esperaba que, con el regreso de Iftikhar Chaudhry y los otros jueces, la Corte Suprema de Justicia levantara los cargos y revocara su inhabilitación

para ocupar puestos públicos y participar como candidato en las elecciones legislativas. Para Zardari, en cambio, la restitución de los jueces no sólo presuponía la posibilidad de que fuese rehabilitado el rival político de mayor popularidad en aquel entonces, sino también el peligro que la Corte Suprema pudiera invalidar la amnistía concedida por Musharraf y le quitara su propio blindaje legal.

La renuncia de Musharraf, la salida de la PML-N de la coalición y el triunfo electoral de Zardari en los órganos legislativos, terminaron de echar abajo el acuerdo de marzo de 2008. Muy pronto la rivalidad con Nawaz Sharif se fue convirtiendo en la principal prioridad del nuevo presidente. El 5 de enero de 2009 la embajadora Patterson reportó una conversación con Zardari en la que el presidente confesó que estaba perdiendo la paciencia y tendría que emprender acciones contra Nawaz Sharif y su hermano Shabbaz, jefe del gobierno de la influyente provincia del Punjab, desde donde la opositora PML-N pretendía desafiar al poder central (US Embassy Islamabad, 2009a). Incluso los acusó de asociación con el terrorismo y de haber presuntamente advertido sobre el congelamiento de sus fondos a la *Jamaat ul-Dawa* (Ídem), una organización proscrita por el Consejo de Seguridad de la ONU y acusada de ser el frente político de la *Lashkar-e-Taiba*, responsable del ataque a Mumbai en noviembre de 2008 y una de las agrupaciones terroristas más grande de Asia sur.

El presidente consideraba inevitable la confrontación y la diplomática advirtió su intención de mantener el recurso de la inelegibilidad como arma para neutralizar a sus adversarios políticos (Ídem). Asimismo le dejó claro que, a contrapelo de las negociaciones previas con la PML-N, no se sentía inclinado a revocar la 17ma Enmienda Constitucional —que implicaría renunciar a los amplios poderes presidenciales heredados de la era Musharraf— argumentando que esa iniciativa debía provenir del parlamento, donde la coalición encabezada por el PPP seguía siendo mayoría.

En los dos meses siguientes la confrontación llegó a su clímax por la decisión de la Corte Suprema de ratificar la inelegibilidad de los hermanos Sharif, el intento del poder central de suplantarse el gobierno del Punjab, las elecciones indirectas del Senado y las protestas populares encabezadas por el movimiento de los abogados que se volcó a las calles a mediados de marzo. La crisis política interna y el repunte de la insurgencia islamista constituyeron las dos principales preocupaciones de la representación diplomática de Estados Unidos en Islamabad.

En un reporte secreto de fecha 4 de febrero, elaborado a propósito de la visita de Richard Holbrooke, enviado especial de Estados Unidos para Afganistán y Pakistán, la embajadora Patterson afirmaba que si bien Pakistán no era un estado fallido, los desafíos que enfrentaba eran muy grandes. Aseguraba que el presidente Zardari era más adepto a las maniobras políticas

que a gobernar y dedicaba más tiempo a su rivalidad con Nawaz Sharif que a frenar el avance de la insurgencia y a mejorar la economía (US Embassy Islamabad, 2009c: 3). La funcionaria ya preveía la posibilidad de que el PPP recurriera a un juego de poder para quitarle a Shahbaz Sharif el gobierno de la provincia del Punjab y consideraba que, aun cuando el líder de la PML-N era con mucho el político más popular del momento, con un 83% de aprobación por tan sólo el 20% del presidente, el gobierno de Zardari y Gilani era estable y Nawaz Sharif carecía de los votos en el órgano legislativo para poner en crisis al ejecutivo y provocar la anticipación de las elecciones (Ibídem: 2), por lo que probablemente apelaría a la agitación callejera como medio de presión.

Las apreciaciones sobre el general Kayani y el presidente Zardari en el contexto de la crisis llaman la atención por su ambivalencia. En la conversación de enero ya citada, Zardari se mostró muy interesado en convencer a la embajadora Patterson del buen estado de las relaciones civiles-militares, al comentarle que él y el jefe del Estado Mayor eran las mejores opciones para el mejoramiento de las relaciones con India después de la crisis provocada por el atentado en Mumbai (US Embassy Islamabad, 2009a). En cambio, en el informe a Holbrooke, la funcionaria alertaba al enviado especial sobre los rumores en torno al descontento de los militares con Zardari y las acciones que pudieran emprender contra él, sobre todo si la situación política se salía de control y fuera necesario restablecer el orden, aunque todavía existían pocas evidencias de que ese escenario pudiera ocurrir y consideraba alentadora la determinación del general Kayani de contribuir al éxito del poder civil y de mantener a los militares al margen de la confrontación política (US Embassy Islamabad, 2009c: 3). En cuanto a la apreciación del presidente, a pesar de sus defectos y de la fuerte crítica por su inoportuna guerra con los hermanos Sharif, la embajadora presentaba a Zardari como pro-americano y anti-extremista, y como el mejor aliado de Estados Unidos en el gobierno (Ídem).

En otra conversación sostenida pocos días más tarde, la embajadora Patterson refirió que el presidente había sido mucho más claro en su propósito de actuar contra Nawaz Sharif y le predijo que la Corte Suprema podría declararlo inelegible para la Asamblea Nacional (US Embassy Islamabad, 2009d: 2). El reporte del encuentro demuestra que Zardari volvió a respaldar la necesidad de enfrentar más temprano que tarde a Sharif con argumentos que también fueran sensibles para los intereses de Estados Unidos, en este caso la supuesta intención del líder opositor de postular como candidato de la PML-N al controversial científico Abdul Qadir Khan (Ídem), fundador del programa nuclear paquistaní y considerado por muchos un héroe nacional, pero a quien Estados Unidos insistentemente había acusado de vender información nuclear a Corea del Norte, Libia e Irán.

El presidente también le reveló que había intentado llegar a un acuerdo con Shabaz Sharif para sacar una enmienda constitucional que incrementara la edad de retiro de los jueces, pero que éste se había mostrado muy poco cooperativo. Asimismo le externó su convencimiento de que el Jefe del Estado Mayor, general Kayani, nunca apoyaría a Nawaz Sharif como Primer Ministro (Ídem). Según Patterson, Zardari se mostró muy preocupado por su seguridad personal y le confesó haber instruido a su hijo Bilawal para que, en caso de ser asesinado, nombrara como presidente a su hermana Faryal Talpur, quien desde 2008 era también miembro de la Asamblea Nacional. En su comentario biográfico, la diplomática agregó que Talpur había impresionado mucho al personal de la embajada y que, según le confesó una vez el propio general Kayani, hubiera sido mucho mejor presidente que su hermano (Ídem).

En otro reporte de coyuntura elaborado con fecha 19 de febrero, previo a una visita programada por el general Kayani a Washington, la embajadora Patterson afirmaba que Zardari y Kayani eran los dos principales tomadores de decisiones en Pakistán y que ambos habían construido una relación de respeto y confianza (US Embassy Islamabad, 2009e: 2). La nota agregaba que Zardari estaba reconfigurando las relaciones civiles-militares después de ocho años de poder de Musharraf y que convenía a los intereses de Estados Unidos que su gobierno pudiera concluir el mandato constitucional de cinco años, por lo que era de alabar el esfuerzo del general Kayani para apoyar el éxito de una democracia civil. Incluso consideraba que el Jefe del Estado Mayor podría acoger de buen grado la Ley Kerry-Lugar que pretendía triplicar la asistencia no militar a Pakistán y que en ese momento estaba pendiente de aprobación por el Congreso (Ídem), un juicio que resultó ser erróneo cuando la ley finalmente se promulgó en octubre de ese año y el general Kayani la criticó fuertemente por interferir en los asuntos internos del país y en las relaciones civiles-militares.

Sin embargo, en otra parte del despacho, la diplomática refería que mientras Zardari y Gilani consideraban el incremento de la insurgencia militante en la frontera afgano-pakistaní como la principal amenaza para el país, los militares y el ISI seguían viendo a la India como el principal peligro y a Afganistán como parte de su profundidad estratégica, y que, en consecuencia, continuaban proporcionando apoyo a los grupos subversivos como un instrumento de su política exterior (Ibídem: 4). En su opinión Kayani, que también había sido jefe del ISI en el período 2004-2007, deseaba que Estados Unidos volteara la página de desconfianza hacia el servicio de inteligencia pakistání; y agregaba que Washington debía preguntarle cuál escenario político en Afganistán lo convencería para dejar de apoyar a la insurgencia, así como sondear qué garantías requeriría para redesplegar las fuerzas concentradas en la frontera con India hacia las FATA,

ya que sin esa reorientación difícilmente el ejército podría contar con fuerzas suficientes para enfrentar la insurgencia islamista (Ídem). La nota de la funcionaria también indicaba que, a pesar de las dificultades financieras, los militares seguían empeñados en expandir sus programas de armas estratégicas y que el general Kayani, aunque guardó silencio al respecto, desaprobó las declaraciones del presidente Zardari acerca de no usar primero armas nucleares en caso de una confrontación con India.

El 25 de febrero la Corte Suprema anunció finalmente la decisión de ratificar la descalificación de los hermanos Sharif para ocupar puestos públicos. Shahbaz tuvo que dejar su cargo y el gobierno del Punjab quedó provisionalmente bajo control federal hasta que la asamblea provincial pudiera elegir al sucesor. Nawaz Sharif responsabilizó directamente al presidente Zardari de manipular la decisión y denunció su intención de imponerles un acuerdo, ya mencionado por Patterson en su cable de 9 de febrero, para extender la permanencia del juez Dogar al frente de la Corte Suprema de Justicia a cambio de levantar los cargos en su contra. Los hermanos Sharif se negaron a presentar algún recurso de apelación legal ante un poder judicial que consideraban ilegítimo y una herencia de la era Musharraf. En su lugar, amenazaron con impugnar la decisión en las calles y resolvieron emprender sus protestas junto con la marcha de los abogados programada para el 12 de marzo.

El mismo día que la Corte Suprema dio a conocer su dictamen, la embajadora Patterson escribió que la decisión no había sido una sorpresa porque desde varias semanas atrás el presidente venía expresando su intención de actuar contra Nawaz, pero en su opinión el momento elegido era muy inapropiado por el avance del talibán a lo largo de toda la frontera con Afganistán y por la grave crisis económica que sufría el país, lo cual demostraba, de manera decepcionante, que Zardari continuaba jugando a la política mientras el país se desintegraba (US Embassy Islamabad, 2009f: 2). Según la diplomática, el movimiento del PPP había sido muy controversial porque apenas unos días antes el primer ministro Gilani le había asegurado a Shahbaz que el PPP no tenía la intención de removerlo del poder en el Punjab, lo que refuerza la idea del interés personal de Zardari y los desacuerdos que pudo generar el tema entre las dos principales figuras del gobierno, aunque en el cable se menciona que el presidente negó haber tenido que ver con la decisión de la Corte Suprema e incluso expresó sorpresa por la descalificación de Shahbaz Sharif (Íbidem: 3).

De acuerdo con el despacho, las repercusiones de la decisión se verían en las calles. Zardari desestimaba la capacidad de Nawaz Sharif para movilizar a las masas, consideraba que sólo algunos centenares de personas saldrían a protestar a las calles y confiaba en tomar las medidas necesarias para reducir el impacto de la marcha anunciada. Si esa apreciación resultaba

correcta, la funcionaria creía que la decisión de la Corte Suprema se mantendría firme, pero si la agitación popular cobraba fuerza podría obligar al ejército a restablecer el orden e incluso llevarlo a emprender acciones para deponer al presidente (Ídem). Sin embargo, la campaña contra el presidente, acusado de recurrir a los mismos métodos de Musharraf para eliminar a sus adversarios políticos, muy pronto empezó a demostrar su efectividad social. A principios de marzo era claro que la embajadora Patterson ya no parecía compartir el optimismo de Zardari y refería en otro cable que la situación creada por la decisión de la Corte Suprema había inspirado protestas y disturbios políticos por todo el país (US Embassy Islamabad, 2009g: 2).

Cuando iniciaron las marchas la percepción de la situación había cambiado notablemente. En un cable de fecha 12 de marzo, la embajadora Patterson advertía que si dos semanas atrás Zardari se miraba victorioso en todos los frentes, ahora reconocía que debía buscar un compromiso con Nawaz Sharif ((US Embassy Islamabad, 2009h: 2). Según el despacho, Zardari trató sin éxito de buscar un acuerdo ofreciéndole la presidencia del Senado a Chaudhry Shujaat, importante figura de la PML-N, a cambio de un gobierno de coalición bipartidista en el Punjab (Ídem). Por otro lado, los líderes del Partido Nacional Awami, Asfundyar Wali Khan, y de la *Jamiat Ulema-e-Islam*, Fazlur Rehman, ambos integrantes de la coalición encabezada por el PPP, también actuaron como mediadores para buscar un arreglo entre las partes. Asfundyar le explicó a Patterson que si Nawaz Sharif consentía en posponer la inminente marcha de los abogados, Zardari estaba dispuesto a solicitar la revisión de la descalificación dictaminada por la Corte Suprema, a reinstalar en el cargo a Shahbaz una vez que la revisión hubiera procedido y a convocar una conferencia para discutir la restitución de los jueces (Ídem: 3).

Pero Nawaz Sharif finalmente rechazó el acuerdo y, en opinión del líder del Partido Nacional Awami, siguió con la postura de exigir demandas inmediatas poco razonables (Ídem). Sin embargo, con el clima de desconfianza imperante, una mediación sobre esas bases tenía muy pocas posibilidades de prosperar porque, aunque Zardari supuestamente parecía dispuesto a ceder, el único resultado inmediato y tangible del acuerdo habría sido la desactivación de un clima político nacional muy favorable a Nawaz Sharif, quien optó por aprovecharlo para incrementar la presión sobre el gobierno.

El líder del Partido Nacional Awami también hizo saber a Patterson que, si bien todos los esfuerzos externos para evitar la crisis eran bienvenidos, el punto de vista más importante era el de Estados Unidos, por lo que Washington debía pedirle a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita que presionaran a sus respectivos aliados (Zardari y Nawaz Sharif) para que llegaran a un acuerdo (Ídem). Si la mediación no funcionaba se temía que las

marchas podían desembocar en una fuerte confrontación. En una conversación sostenida un día antes con el Ministro del Interior, referida en el mismo documento, éste le informó que había tratado sin éxito de convencer a los abogados para que mantuvieran la marcha pacífica fuera de Islamabad y que haría lo necesario para mantener la ley y el orden, incluyendo el arresto de los hermanos Sharif si no paraban las protestas, acción que la embajadora Patterson consideró contraproducente y que no sería bien vista por Estados Unidos ni por nadie (Ídem).

La diplomática también se refirió a cuatro conversaciones sostenidas con el Jefe del Estado Mayor en la semana previa a las marchas. En ellas el general Kayani le dejó claro que de agravarse la situación tendría que instar a Zardari a renunciar, quien cada vez gozaba de menos prestigio en los círculos militares por su fama de corrupto, pero no estableció ninguna línea roja para la actuación. La alternativa no era un golpe de Estado, sino sustituir a Zardari por Asfundyar Wali Khan, líder del Partido Nacional Awami, o cualquier otro político de la coalición y mantener el gobierno del PPP conducido por el Primer Ministro Gilani para de esa forma evitar la necesidad de unas nuevas elecciones que pudieran llevar al poder a Nawaz Sharif, por quien el general Kayani profesaba una desconfianza todavía mayor. En opinión de la funcionaria la intervención no parecía inminente, más bien constituía un aviso a Estados Unidos para que ayudara a evitar la crisis arreciando las presiones sobre los dos políticos rivales (Ibídem: 4). Finalmente, la embajadora comentaba que Zardari necesitaba recuperar la confianza de los militares y concluía que, aun cuando lograra congelar las marchas, Nawaz Sharif conservaría una superioridad moral en la opinión pública que usaría para seguir atacando al debilitado presidente (Ibídem: 5).

La crisis de marzo concluyó con un rotundo triunfo político de Nawaz Sharif. Las manifestaciones de protesta obligaron al presidente Zardari a replegarse en toda la línea. El juez Iftikhar Chaudhry fue finalmente restituido en su cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia de descalificación para ocupar cargos públicos quedó revocada y Shahbaz Sharif recuperó el gobierno del Punjab. En un despacho secreto dirigido al Asesor de Seguridad Nacional James Jones, previo a su visita a Pakistán en junio de 2009, la embajadora Patterson afirmaba que, aun cuando Zardari retuviera la presidencia, Nawaz Sharif había sido el ganador real de las marchas de marzo y ese éxito le permitiría preparar el camino hacia las próximas elecciones generales (US Embassy Islamabad, 2009j).

En opinión de la diplomática, el presidente Zardari se había excedido durante la crisis política en curso y eso había afectado más su pobre popularidad. Pero si bien las torpezas del inexperto líder del PPP y el desenlace de la confrontación tuvieron mucha importancia en el curso interno de la transición democrática, poco modificaron en ese momento la

percepción de Washington con respecto al presidente paquistaní, a quien seguían viendo, como le insistió Patterson al Asesor de Seguridad Nacional en ese último cable, como secular, anti-extremista y pro-norteamericano (Ídem), atributos que lo seguían perfilando como el mejor aliado de Estados Unidos en Pakistán.

Conclusión:

La transición democrática logró resistir la prueba de fuego de las manifestaciones populares de marzo de 2009. El presidente Zardari cedió ante la oposición y con ello inició un proceso de reajuste en la estructura de poder que llegó a su clímax en abril de 2010 con la aprobación de la 18va Enmienda Constitucional, la cual derogó las excesivas atribuciones presidenciales heredadas de la época de Musharraf, en particular las facultades para destituir al primer ministro y disolver la Asamblea Nacional. Sin embargo, a diferencia de ocasiones anteriores, la oposición no consiguió hacer colapsar al gobierno y la crisis no provocó la intervención directa de los militares. A pesar de las múltiples dificultades (oposición civil, violencia islamista, crisis económica, pobre popularidad de Zardari, desconfianza de los militares y presiones de Estados Unidos para combatir el terrorismo) el gobierno del PPP pudo completar el mandato constitucional de cinco años y, por primera vez en la historia del país, traspasar el poder a otro gobierno civil en las elecciones generales de 2013, en las que Nawaz Sharif por fin pudo coronar su aspiración de ganar un tercer mandato como primer ministro.

Como se intentó demostrar a lo largo de este artículo, el periodo de marzo/2007 a marzo/2009 constituyó un momento crucial en ese camino de la transición democrática. Aunque el curso del proceso estuvo determinado por una compleja y diversa serie de interacciones, los cables de la embajada de Estados Unidos analizados confirman que el gobierno de Washington y el ejército paquistaní fueron los árbitros principales del juego político.

La actitud de la Casa Blanca hacia la crisis política en Pakistán no estuvo orientada por un compromiso ideológico con la democracia, fenómeno recurrente en las relaciones bilaterales, sino por los intereses estratégicos de su guerra contra el terrorismo. Durante 2007 y principios de 2008 Estados Unidos mantuvo su apoyo a Musharraf y promovió las negociaciones con Benazir Bhutto y el PPP porque consideraba que un gobierno moderado de coalición podía darle a Pakistán la estabilidad política necesaria para jugar su papel en la lucha contra el islamismo radical en un momento de repunte de la insurgencia a ambos lados de la Línea Durand. La administración Bush empezó a mostrarse más inclinada por la transición cuando el sostenimiento de Musharraf en el poder se convirtió en una peligrosa complicación para los propósitos de la estrategia antiterrorista y

contribuyó a reforzar los sentimientos anti-norteamericanos en la sociedad pakistaní. En ese caso, fungió de mediadora para procurarle garantías a su viejo aliado y apoyó la mejor alternativa para la política de la Casa Blanca.

Los despachos de la embajadora Anne Patterson confirman que el nuevo líder del PPP, Ali Zardari, afloró como la figura clave de la transición porque desde el principio mostró una actitud moderada y dispuesta al compromiso con Musharraf y supo convencer a Estados Unidos de sus credenciales de político secular, anti-extremista y pro-norteamericano. Aun cuando su desatino político con Nawaz Sharif fue visto como una desafortunada distracción, el gobierno de Washington siguió considerando a Zardari su principal aliado, en contraposición a una alternativa opositora (Nawaz Sharif) y a un sector militar tradicionalmente vinculados con la corriente islamista. Esa percepción influyó definitivamente en la decisión de la administración Obama de promover la consolidación del gobierno civil a través de la Ley Kerry-Lugar y el incremento de la asistencia no militar a Pakistán.

En cuanto a los militares, su papel puede explicarse por las dificultades que atravesaba en ese entonces la propia institución castrense. Si en el pasado las guerras habían contribuido a fortalecer la identidad islámica del país por la naturaleza no musulmana de sus adversarios (India, Unión Soviética), la lucha contra el terrorismo promovida por Estados Unidos provocó una fuerte desmoralización dentro de un ejército adoctrinado en los principios de la yihad y la defensa de la nación islámica. Como nuevo jefe del Estado Mayor, el general Kayani se propuso recuperar el prestigio de la institución castrense en la sociedad pakistaní. En consecuencia se distanció gradualmente del propio Musharraf y desestimuló la intervención abierta de los militares en la confrontación política, a la vez que trató de hacer ver los operativos contra la insurgencia en las FATA como iniciativas propias en favor del interés nacional de Pakistán.

Ese reposicionamiento social permitió a las fuerzas armadas desempeñar una función más de arbitraje que de intervención directa en el curso de la crisis política. Pero el cambio, en general bien visto (por los partidos, la opinión pública y Estados Unidos), también tuvo sus límites. El alto mando militar no estaba dispuesto a permitir el precedente que un poder civil enjuiciara a un ex jefe del Estado Mayor, o que las disputas de los partidos pusieran en riesgo la estabilidad política y económica del país. Más aun, a pesar de su retraimiento estratégico, estaban lejos de aceptar que la transición democrática implicara una subordinación efectiva de la institución militar al gobierno civil, actitud que luego se reflejó (contrario al pronóstico de la embajadora Patterson) en su crítica a la ley Kerry-Lugar, así como en la cadena de acontecimientos ocurridos en 2011 (el operativo contra Osama bin Laden en Abbotabad, el escándalo del *memogate* y el incidente de

Salala) que pusieron de nueva cuenta en tensión las relaciones civiles-militares y llevaron los vínculos con Estados Unidos a su nivel más bajo desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

References:

- Abbas, H. (Ed.). (2009). *Pakistan's Troubled Frontier*. Washington: The Jamestown Foundation.
- Aziz, M. (2009). *Military Control in Pakistan*. London and New York: Routledge.
- Baltar Rodríguez, Enrique (2009). *Pakistán. Islam, pretorianismo y democracia*, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 2009.
- Election Commission of Pakistan. (2008). *General Elections-2008*. Recuperado el 10 de marzo de 2014 de <http://www.ecp.gov.pk/GE2008.aspx>.
- EU Election Observation Mission. (2008). *Final Report. National and Provincial Assembly Elections 18 February 2008*. Recuperado el 25 de marzo de 2014 de http://www.eods.eu/library/FR%20PAKISTAN%2016.04.2008_en.pdf.
- Kronstadt, K.A. (2008). *Pakistan's 2008 Elections: Results and Implications for U.S. Policy*. CRS Report for Congress. Recuperado el 14 de octubre de 2008 de <http://fpc.state.gov/documents/organization/104699.pdf>.
- Malik, Iftikhar (2010) *Pakistan. Democracy, Terror and the Building Nation*, New Holland Publishers, United Kingdom.
- Nawaz, Shuja. (2009). *FATA - A Most Dangerous Place*, Center for Strategic & International Studies (CSIS), Washington.
- Plaw, A. & Fricker, M.S. (2012). Tracking the Predators: Evaluating the US Drone Campaign in Pakistan, En *International Studies Perspectives*, Vol. 13, pp. 344-365.
- Rashid, A. (2009). *Descenso al caos. EE.UU. y el fracaso de la construcción nacional en Pakistán, Afganistán y Asia Central*. Barcelona: Ediciones Península.
- Rizwan, M., Rafiuddin, Arshid, M. & Waqar, M. (2014). Democratic Milestone in Pakistan: A Serener Transition of Command from PPP to PML-N. En *IOSR Journal of Humanities and Social Sciences (IOSR-JHSS)*, Vol. 19, No. 9, pp. 102-108. Recuperado el 20 de enero de 2015 de www.iosrjournals.org.
- Siddiq, A. (2007). *Military Inc. Inside Pakistan's Military Economy*. London: Pluto Press.
- Singh, Ch., Bailey, M. (2013). Praetorian Democracy, Iliberal but Enduring: Pakistan as Exemplar. En *Southeast Review of Asian Studies (SERAS)*, Vol. 35, pp. 103-126.

US Embassy Islamabad. (2007a). *07ISLAMABAD256*, 17/01/2007. Cablegate: 250,000 US Embassy Diplomatic Cables, Wikileaks, <http://46.59.1.2>.

_____. (2007b). *07ISLAMABAD4085*, 21/09/2007. Cablegate: 250,000 US Embassy Diplomatic Cables, Wikileaks, <http://46.59.1.2>.

_____. (2008a). *08ISLAMABAD405*, 28/01/2008. Cablegate: 250,000 US Embassy Diplomatic Cables, Wikileaks, <http://46.59.1.2>.

_____. (2008b). *08ISLAMABAD483*, 01/02/2008. Cablegate: 250,000 US Embassy Diplomatic Cables, Wikileaks, <http://46.59.1.2>.

_____. (2008c). *08ISLAMABAD525*, 05/02/2008. Cablegate: 250,000 US Embassy Diplomatic Cables, Wikileaks, <http://46.59.1.2>.

_____. (2008d). *08ISLAMABAD1998*, 30/05/2008. Cablegate: 250,000 US Embassy Diplomatic Cables, Wikileaks, <http://46.59.1.2>.

_____. (2008f). *08ISLAMABAD2524*, 25/07/2008. Cablegate: 250,000 US Embassy Diplomatic Cables, Wikileaks, <http://46.59.1.2>.

_____. (2008e). *08ISLAMABAD2802*, 23/08/2008. Cablegate: 250,000 US Embassy Diplomatic Cables, Wikileaks, <http://46.59.1.2>.

_____. (2009a). *09ISLAMABAD24*, 05/01/2009. Cablegate: 250,000 US Embassy Diplomatic Cables, Wikileaks, <http://46.59.1.2>.

_____. (2009b). *09ISLAMABAD155*, 24/01/ 2009. Cablegate: 250,000 US Embassy Diplomatic Cables, Wikileaks, <http://46.59.1.2>.

_____. (2009c). *09ISLAMABAD236*, 04/02/2009. Cablegate: 250,000 US Embassy Diplomatic Cables, Wikileaks, <http://46.59.1.2>.

_____. (2009d). *09ISLAMABAD289*, 09/02/2009. Cablegate: 250,000 US Embassy Diplomatic Cables, Wikileaks, <http://46.59.1.2>.

_____. (2009e). *09ISLAMABAD365*, 19/02/2009. Cablegate: 250,000 US Embassy Diplomatic Cables, Wikileaks, <http://46.59.1.2>.

_____. (2009f). *09ISLAMABAD415*, 25/02/2009. Cablegate: 250,000 US Embassy Diplomatic Cables, Wikileaks, <http://46.59.1.2>.

- _____. (2009g). *09ISLAMABAD454*, 03/03/2009. Cablegate:
250,000 US
Embassy Diplomatic Cables, Wikileaks, <http://46.59.1.2>.
- _____. (2009h). *09ISLAMABAD516*, 12/03/2009.
Cablegate: 250,000 US
Embassy Diplomatic Cables, Wikileaks, <http://46.59.1.2>.
- _____. (2009i). *09ISLAMABAD1119*, 25/05/2009.
Cablegate: 250,000 US
Embassy Diplomatic Cables, Wikileaks, <http://46.59.1.2>.
- _____. (2009j). *09ISLAMABAD1364*, 20/06/2009.
Cablegate: 250,000 US
Embassy Diplomatic Cables, Wikileaks, <http://46.59.1.2>.